

Claves de Latinoamérica

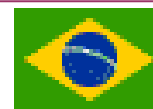
BRASIL

Nº 63

Informe de coyuntura



Mayo 2017



ESCÁNDALO ODEBRECHT

La Suprema Corte autorizó antes de Semana Santa que se investigase a una centena de políticos, tomando por base las acusaciones de 79 ejecutivos de la empresa de obras Odebrecht. Paralelamente, autorizó la divulgación de las 900 horas de grabaciones de los ejecutivos ante los jueces y fiscales. Y todo esto tan sólo un mes después de que la investigación sobre 'Lava Jato' completara 3 años.

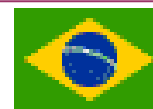
Se investigarán a 8 ministros del actual gobierno, 29 senadores (en total en el Parlamento son 81, por lo tanto, se habla de más de un tercio del total, incluso el presidente de la Casa) y 42 diputados federales (de un total de 513, incluso el presidente del Congreso, también bajo sospecha), tres gobernadores (hay otros que podrán ser investigados pero en otros foros) y cuatro ex presidentes de la República (uno actualmente senador). Amén de otros 23 políticos con otros cargos. Y esto sólo con la acusación de Odebrecht. Todavía faltan los acuerdos firmados por otras empresas, varios políticos y profesionales que tuvieron algún tipo de vínculo con toda esta operación, así como especialistas en Marketing.

Los brasileños, tan adeptos de las novelas de television, ahora se dividen entre ese tipo de entretenimiento y las imágenes de ejecutivos de Odebrecht que los medios no dejan de mostrar en todo momento. Los políticos involucrados se dividen entre negar las acusaciones y no comentarlas.

Pocos se atreven a hacer pronósticos sobre los plazos y las consecuencias que generará este enredo, ya que por cuestiones que estipula la legislación brasileña, tanto políticos como gobernadores, presidentes, diputados o congresistas en general dependen de que la Suprema Corte, autorice la investigación. Por lo tanto, si la Suprema Corte considera que no hay indicios suficientes, no permite la investigación y, por ende, tampoco la imputación.

Una de las consecuencias que quedaron muy claras de todas las acusaciones de Odebrecht es que muchos puntos de la política económica del Partido de los Trabajadores (PT) no eran tan ideológicos como se pensaba. Había en realidad una negociación a cambio de dinero para editar determinadas leyes y medidas que beneficiaban a la constructora a cambio de dinero que era utilizado bien para enriquecimiento personal de algunos

Una de las consecuencias que quedaron muy claras de todas las acusaciones de Odebrecht es que muchos puntos de la política económica del Partido de los Trabajadores (PT) no eran tan ideológicos como se pensaba



políticos bien para financiar sus campañas electorales. Y ahí es cuando se incurre en diversas ilegalidades que pueden ir hacia el área delictiva o electoral, ya que en Brasil existe una Justicia Electoral que juzga todos los ilícitos cometidos en este ámbito. En este caso, las penas incluyen la pérdida del mandato, independientemente de las sanciones delictivas, que van desde multas hasta penas de cárcel. Y cada una corre a su ritmo, pero una no anula a la otra. Por eso es tan difícil estimar tiempos. Después de concluídas las investigaciones, la Suprema Corte tendrá que juzgar a los políticos que tienen prerrogativa de foro. Pero en este momento tiene acumulados 53.000 procesos que aún no juzgó y no se sabe cuántos a ciencia cierta surgirán de todas estas acusaciones. Por ello es posible que varias demandas caduquen antes de su juicio.

La magnitud de todo esto puede ser interpretada en números que no dejan de crecer a cada semana. En un primer momento, el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), el órgano encargado de supervisar transferencias financieras, constató

A cada nueva denuncia, y las hay todos los días, el país y la economía se vuelven a parar en Brasil. Lo que se teme ahora son las declaciones de João Santana y de su esposa Mônica Moura, ambos a cargo del márketing político en varias campañas electorales del PT

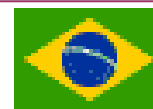
que el grupo realizó operaciones financieras "atípicas" por un valor que supera los US\$ 3.000 millones.

Hasta este momento, a pesar de las negativas de los acusados, no se han verificado mentiras por parte de los acusadores – ni por la Policía que investiga ni por la Justicia. Como máximo, omisiones. Tanto que ningún futuro imputado ni siquiera ha demandado a ningún acusador, a pesar de varias amenazas en ese sentido.

Las condenas no dejan de aparecer por doquier. La Justicia de Estados Unidos sentenció Odebrecht el 17 de abril a pagar US\$ 2.600 millones de multas en caso de corrupción. De ese total, US\$ 93 millones se destinan a los EEUU, US\$ 116 millones a Suiza y los restantes US\$ 2.390 millones a Brasil.

La empresa ya se enfrenta a prohibiciones de operar en Panamá, tremendas dificultades que pueden redundar también en cancelaciones en Perú y no se espera que sea diferente en otros países. No se cree que Odebrecht salga de este escándalo sin manchas, incluso no se sabe si seguirá existiendo, a pesar de haber sido la empresa de obras civiles más grande de Brasil alcanzando los 120.000 empleados.

A cada nueva denuncia, y las hay todos los días, el país y la economía se vuelven a parar en Brasil. Lo que se teme ahora son las declaciones de



João Santana y de su esposa Mônica Moura, ambos a cargo del márketing político en varias campañas electorales del PT. Los dos ya confesaron haber recibido dinero en el exterior, incluso por campañas presidenciales en otros países. Y todo sin haberlo declarado al Fisco.

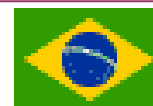
Entre una denuncia y otra el gobierno de Michel Temer intenta ejercer sus funciones. Pero es bastante difícil, pues aunque tenga el apoyo de la mayoría del congreso a cada momento se interrumpen las negociaciones, las discusiones en el Congreso y se cuestiona la credibilidad y hasta la permanencia en el cargo de ministros de Estado que constan en las acusaciones de Odebrecht.

Por su lado, diputados y senadores amenazan al Poder Judicial con proyectos de ley que podrían perjudicar las investigaciones policiales en general y la de 'Lava Jato' en especial.

Actualmente, tanto Temer como la ex presidente Dilma Rousseff (de quien Temer fue vicepresidente en los sus dos mandatos), corren riesgos en la justicia electoral, pues enfrentan denuncias de uso de gratificación para financiar sus campañas. Pero al contrario que ella, Temer no puede ser demandado por cuestiones que no sean del mandato que ocupa actualmente. Por su parte, Rousseff y el Partido de los Trabajadores hacen de todo para prorrogar el juicio para evitar que a ella le retiren sus derechos y pueda candidatarse a algún cargo electivo en el sufragio del 2018, que incluye presidente de la República, mitad del Senado, diputados y gobernadores de los estados.

La magnitud de todo esto puede ser interpretada en números que no dejan de crecer a cada semana

Temer y su partido, el PMDB, alegan que la cabeza de la combinación era el PT y que ellos estaban a cargo de recaudar dinero para la campaña. Rousseff y el PT alegan que era una 'placa única'. Entre los varios problemas que este planteamiento plantea está que hasta ahora la narrativa del PT era que Temer había dado un golpe de Estado al asumir la presidencia de la República tras el impedimento de Rousseff. Pero si dicen que era todo una cosa sola, cae por tierra el discurso del golpe, pues sería reconocer que él tiene legitimidad para asumir el cargo. Si surgiera algo sobre el actual mandato de Temer él sí podría ser impedido a seguir en la presidencia. Pero hasta este momento parece muy poco probable. Hasta los partidos de oposición dudan de esa posibilidad pues en la mejor de las hipótesis un juicio de este tipo se alargaría por lo menos dos años y su eventual conclusión coincidiría con las elecciones presidenciales de octubre del 2018. En la práctica, no habría tiempo hábil para echarlo del gobierno.



REFORMAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

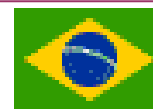
Dos de las principales metas de Temer, y prácticamente los pilares de su gobierno, son la aprobación de un nuevo marco para la Seguridad Social y otro para las regulaciones laborales. Ambas están bastante complicadas pues con tantos diputados, senadores y ministros involucrados e intentando salvar el propio pellejo difícilmente se conseguirá quorum en el Parlamento para que se discutan cambios de la legislación. Hasta un par de meses atrás, todo el mercado apostaba por la fácil aprobación de la reforma de la Seguridad Social y a una aprobación más apretada en términos de margen de la reforma laboral. Ahora, aún después de varias concesiones hechas por el gobierno, la reforma de las leyes laborales se aprobó y la tendencia es que se apruebe también la de la Seguridad Social. La cuestión es saber si tras tantas concesiones valdrá la pena gastar tantas fichas en tan poco resultado.

Ya se negociaron varios puntos en los cuales el gobierno aflojó las exigencias en relación a las dos reformas. En la cuestión de la Seguridad Social se teme que si el gobierno siguiera aflojando la reforma podría no ser

Sea cual sea el resultado, los reflejos de una eventual reforma de la Seguridad Social no se notarán sobre el gobierno Temer – que termina, como máximo, el primer día del 2019

tan eficaz como es necesario. La principal alegación de Temer es que Brasil tuvo un déficit de R\$ 152.000 millones (45.709 millones de euros) en 2016 sólo con la Seguridad Social y que este año podría llegar a los R\$ 183.000 millones (55.031 millones de euros). Si se siguen haciendo excepciones, los números podrían crecer. Por ahora, se negocia la flexibilización de exigencias como la edad mínima para jubilarse, tal vez mantener alguna diferencia entre la edad mínima entre hombres y mujeres, y facilitar los índices de transición para aquellos que están a pocos años de jubilarse.

Una maniobra bastante utilizada por Temer para garantizar la aprobación de la reforma es “despedir” a sus ministros que tengan cargos de diputados o senadores y que podrían volver a ocupar sus sillas en el Parlamento para avalar la aprobación de la medida. No es un número despreciable, puesto que de sus dos docenas de ministros, 14 son diputados y le garantizarían varios votos, además de los que ellos mismos consiguen atraer dentro de sus propios partidos. La situación necesita un mínimo de 308 diputados a favor del total de 513 diputados. Pero los mismos diputados que tendrán que votar una reducción de los beneficios, especialmente las jubilaciones, también pretenden presentarse a las elecciones del 2018 y difícilmente irán en contra de lo que sus electores quieren, que es mantener las condiciones como están. Por lo tanto, por más que el gobierno negocie y



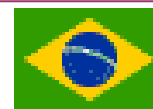
afirme que tiene mayoría, hay mucha incertidumbre. Temer ha señalado en varias ocasiones que no se presentará a la presidencia y es más que probable que sea cierto, ya que su popularidad anda `por los suelos`, pero no así los congresistas. Y además el sistema brasileño permite que después de aprobado un proyecto se le agreguen, dentro del Congreso, alteraciones que van después a sanción presidencial.

Sea cual sea el resultado, los reflejos de una eventual reforma de la Seguridad Social no se notarán sobre el gobierno Temer – que termina, como máximo, el primer día del 2019.

Temer ya les mandó un mensaje no tan velado a los diputados y senadores, diciendo que aquellos que pertenecen a los partidos que apoyan al gobierno federal tienen que votar la reforma de la Seguridad Social y dejó claro que quien no se empeñe por esto será considerado un opositor. Paralelamente se levanta un movimiento que pide una asamblea constituyente, con parlamentarios votados especialmente para este fin ya que entre los que ocupan estos cargos, muchos están siendo investigados y muchos otros bajo sospecha, pues aún falta que se conozcan las acusaciones de otras empresas y hasta de políticos, especialistas en Marketing Político y publicitarios que trabajaron vinculados a políticos en los últimos años. El trámite legal para que esto sea posible es también bastante demorado y la última vez que se hizo fue para alterar la Constitución, promulgada en 1988. Pero el momento político era otro, había liderazgos de peso y aún así fue muy difícil lograrlo. Ahora parece imposible.

Una maniobra bastante utilizada por Temer para garantizar la aprobación de la reforma es "despedir" a sus ministros que tengan cargos de diputados o senadores y que podrían volver a ocupar sus sillas en el Parlamento para avalar la aprobación de la medida

En contra del proyecto de reforma laboral se hizo una huelga general el 28 de abril, convocada y estimulada por el Partido de los Trabajadores y movimientos sindicales de izquierda. Tuvo bastante éxito gracias a una suma de factores: la paralización de los transportes, lo que impidió llegar al trabajo a muchos que no se querían adherir al movimiento, la previsión de conflictos, que de hecho ocurrieron y por lo que muchos preventivamente no salieron de sus casas, y, porque no decirlo, que se hubiera marcado una huelga para un viernes cuando el lunes era feriado nacional del Día del Trabajo. Inicialmente el motivo de la huelga era evitar la reforma de las leyes laborales pero se mantuvo la fecha aún cuando ya se había aprobado el proyecto en el Congreso. En la práctica el motivo era maniatar al gobierno federal y en eso fue plenamente exitosa. Y paralelamente Luis Inácio Lula da Silva sigue haciendo campaña para candidatarse a presidente en el 2018.



Las encuestas lo muestran a la delantera, pero como no sabe a ciencia cierta quienes serán sus contrincantes, no pasa de ser una especulación.

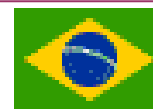
En medio a todo este torbellino, es poco probable que se apruebe otro pleito importante de la sociedad: la reforma político-partidaria. Brasil tiene en este momento 35 partidos políticos, pero quedó muy claro con todas las denuncias de Odebrecht que muchos de ellos se criaron y se mantienen sólo a cambio de dinero. En algunas de las acusaciones de la empresa queda muy claro que ellos pagaron a pequeños partidos a cambio del apoyo de éstos al Partido de los Trabajadores. Al aliarse en apoyo político, le brindan el tiempo que todos los partidos políticos tienen gratis en televisión para hacer sus propagandas.

El PT levantó la bandera de la votación en lista cerrada, pero ni siquiera en el seno del partido hay unanimidad, pues una parte más pragmática entiende que esta medida, justamente ahora que hay tantas acusaciones contra sus miembros, sería vista por la sociedad como un intento de cubrir a miembros corruptos. Al fin y al cabo, al votar en el partido el elector no sabría efectivamente a quien le otorgaría su voto, pues los nombres serían elegidos internamente sin que el público supiera quienes ganarían. Y, nuevamente, sería una forma de darle privilegios a alguien que está siendo investigado y que podría no tener ese beneficio si no se eligiera. Otros partidos, así como varios analistas, interpretan que el voto en lista cerrada favorecería a los partidos ya estructurados, exilando a nuevos de representación legislativa. Y con 35 partidos sería difícil mantener algún tipo de equilibrio en un sistema presidencialista tan peculiar como el brasileño.

SECTOR TELECOMUNICACIONES

Fuera del tema de la política, poco ocurre en el país, paralizado por tantos escándalos. Tal vez por ese motivo, avance el proyecto de ley del gobierno federal, que está a punto de ser enviado al Congreso para su evaluación y votación. Este Proyecto de ley permitirá a las empresas de telecomunicaciones transformar el montante que deben en multas en inversiones.

La cuestión es polémica y tal vez en otras circunstancias no se aprobaría, pero en este momento es una de las propuestas que más avanzan gracias, principalmente, al empeño personal del ministro de Comunicaciones, Gilberto Kassab. De buena articulación política, a punto de haber participado de varios gobiernos y de haber ocupado cargos como diputado, ministro y hasta alcalde de la ciudad más importante del país económicamente hablando (Sao Paulo), Kassab parece estar preparando el terreno para que el Estado intervenga en la operadora Oi, que está en



proceso de recuperación, bajo una deuda de US\$ 21.000 millones. Si se aprobara tal proyecto, Oi, que es la operadora que más debe en multas (un total de R\$ 15.000 millones (cerca de 5.000 millones de euros), podría invertir esa misma cantidad en mejoras en sus sistemas.

Las reclamaciones de varios sectores de la sociedad surgen a cada momento. Otros sectores pleitean el mismo beneficio pero parece poco probable que consigan condiciones tan benéficas. Como otras operadoras están en la misma situación, el sector de telecomunicaciones prácticamente no se manifiesta al respecto y aunque todas las críticas recaigan sobre la deuda de Oi, los competidores saldrán ganando ya que el proyecto de ley vale para todo el segmento.

Aunque se realizaron denuncias y peticiones de investigación contra Kassab en operativos como el de 'Lava Jato', hasta ahora el ministro de las Comunicaciones apareció poco en portadas y se garantizó el lugar que necesita a la sombra y con discreción para ayudar al sector que dirige. Fuentes del área de telecomunicaciones no llegan a preocuparse demasiado con las denuncias contra el ministro pues creen que los dos proyectos (de canje de multa por inversiones y de una eventual intervención) ya están tan encaminados que difícilmente dejarán de aprobarse.

Kassab parece estar preparando el terreno para que el Estado intervenga en la operadora Oi, que está en proceso de recuperación, bajo una deuda de US\$ 21.000 millones

Por su parte, aunque los representantes de la agencia que regula las comunicaciones, Anatel, también señalan que no habrá intervención en Oi, cada vez tienen menos credibilidad. Y si el Congreso aprobara estas medidas es muy improbable que el presidente Temer las vete de alguna manera. Kassab es persona importante dentro de su partido y suele ser aliado de los gobiernos federales - e ir en contra de algo así no es de la personalidad de Temer.

Los argumentos usados por Anatel y Kassab son los de que el sector necesita alguna ayuda para apalancar inversiones y 'destrabar' otras. Pero oficialmente ambos niegan que puedan intervenir en cualquier empresa de telecomunicaciones. Pero la verdad es que por muy importante que sea éste sector, y lo es, las cuestiones políticas y la supervivencia de los propios políticos está por encima de estas cuestiones y hasta podrían aprobar proyectos de ley a cambio de otro tipo de ayuda para permanecer en el cargo. Y eso vale no solo para proyectos del área de telecomunicaciones sino para cualquier sector.

Río de Janeiro, Mayo 2017